

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO



SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL
MAGISTRADA PONENTE: MARIA NANCY GARCÍA GARCÍA

PROCESO	ORDINARIO
DEMANDANTES	MARIELA AGUDELO MAHECHA
DEMANDADOS	COLPENSIONES
PROCEDENCIA	JUZGADO SÉPTIMO LABORAL DEL CTO DE MEDELLÍN
RADICADO	05001 31 05 007 2022 00212 01
SEGUNDA INSTANCIA	APELACIÓN y CONSULTA
TEMAS Y SUBTEMAS	Pensión de Vejez - Mora Patronal
DECISIÓN	MODIFICA

SENTENCIA No. 281

Medellín, treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

En atención a lo previsto en el decreto 806 del 4 de junio de 2020 convertido en legislación permanente a través Ley 2213 de 2022, una vez discutido y aprobado en la SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL el presente asunto, según consta en Acta N° 041 de 2023, se procede a dictar **SENTENCIA** en orden a resolver el GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA en favor de **COLPENSIONES**, respecto de la *Sentencia del 4 de mayo de 2023*, proferida por el JUZGADO SÉPTIMO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN.

ANTECEDENTES

La señora **MARIELA AGUDELO MAHECHA** presentó demanda ordinaria laboral en contra de **COLPENSIONES**, con el fin de que: **1)** Se declare que tiene derecho a la pensión de vejez, disponiéndose el pago del retroactivo de mesadas resultante. **2)** Así mismo, peticionó el pago de los intereses moratorios reglados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, o la indexación de las sumas resultantes.

Como sustento de tales pedimentos, expuso que nació el 4 de agosto de 1960 y cotizó al Sistema General de Pensiones un total de 1.390 semanas, razón por la cual acudió a **COLPENSIONES** el 4 de abril de 2022 a solicitar la pensión de vejez, prestación que le fuera negada por esta entidad mediante *Resolución SUB 109992 del 25 de abril de 2022*, tras considerar que no cumplía con la densidad de semanas requeridas para acceder al derecho (f. 3 a 7 Archivo 02 ED).

POSICIÓN DE LA ACCIONADA

La demandada **COLPENSIONES** se opuso a la prosperidad de las pretensiones, argumentando que, en realidad la demandante solo cuenta con 1.229 semanas cotizadas, las cuales son insuficientes de cara a la pensión de vejez reclamada.

Propuso las excepciones que denominó: “(...) *INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE RECONOCER PENSION DE VEJEZ; REQUISITOS PARA OBTENER LA PENSIÓN DE VEJEZ; INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE PAGAR INTERESES DE MORA DEL ARTÍCULO 141 DE LA LEY 100 DE 1993; PRESCRIPCIÓN; COMPENSACION e IMPOSIBILIDAD DE CONDENA EN COSTAS* (...)” (f. 2 a 21 Archivo 07 ED).

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Surtido el trámite de primera instancia, el JUZGADO SÉPTIMO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, mediante *Sentencia del 4 de mayo de 2023*, decidió:

“(…) **PRIMERO:** Se **DECLARA** que la Sra. **MARIELA AGUDELO MAHECHA**, identificada con cedula de ciudadanía número 38.863.388, le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la pensión de vejez a cargo de la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES**, en tanto acreditó los requisitos establecidos en el art. 33 de la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003.

SEGUNDO: En **CONSECUENCIA**, Se **CONDENA** a **LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES**, a reconocer y pagar a la Sra. **MARIELA AGUDELO MAHECHA**, la pensión de vejez, a partir del 23 de mayo de 2022, en razón de **13 mesadas pensionales anuales**, debiendo cancelar a la demandante por concepto de retroactivo la suma de **catorce millones trescientos treinta y tres mil trescientos treinta y tres pesos**), que corresponden a las mesadas pensionales causadas entre el 23 de mayo de 2022 y el 31 de mayo del año 2023.

TERCERO: Se **CONDENA** a **LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES**, a reconocer, a la Sra. **MARIELA AGUDELO MAHECHA**, partir del 1º de junio del año 2023 de manera vitalicia, una mesada pensional equivalente a **UN (1) salario mínimo legal mensual vigente**, incluyendo la mesada adicional del mes de **diciembre**, y los incrementos anuales aprobados por el Gobierno Nacional.

CUARTO: Se autoriza a **LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES** a realizar los descuentos por aportes en salud de las mesadas pensionales retroactivas y futuras, dineros que deberán ser girados a la empresa promotora de salud que elija la demandante.

QUINTO: Se condena a **LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES** a reconocer y pagar los intereses de mora establecidos en el art. 141 de la Ley 100 de 1993, los cuales se liquidarán con base en el valor de la mesada y el tiempo de mora transcurrido desde el 06 de agosto de 2022 hasta la fecha efectiva de su pago.

SEXTO: El despacho declara no probadas las excepciones propuestas por **COLPENSIONES**.

SÉPTIMO: Se **CONDENA** en costas a **LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES**, y se fijan como agencias en derecho la suma equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente, es decir, **UN MILLÓN CIENTO SESENTA**

MIL PESOS, (\$1.160.000, 00) en cabeza de COLPENSIONES y a favor de la demandante (...).

Para arribar a esta decisión, la Juez de primer grado comenzó por rememorar lo relativo a la cobertura de diversas contingencias en virtud de lo normado en la Ley 100 de 1993, entre estas, la de vejez, según las definiciones precisadas a partir del desarrollo jurisprudencial creado alrededor de la aludida normativa, citando para el efecto las sentencias C-177 de 1998 y C-230 de 1998 en torno a la definición de la pensión en este riesgo, que surge de la acumulación de cotizaciones, la cual, en lo que interesa al RPMPD, aparece regulada en el artículo 33 ley 100 supra, que presupone, para el caso de las mujeres, llegar a la edad de 57 años y acumular un total de 1.300 semanas de cotización.

En contraste con ello, explicó en relación con la mora patronal, que conforme el artículo 15 de la Ley 100 de 1993, quienes fueran vinculados por contrato de trabajo son afiliados obligatorios al sistema de pensiones; vinculación que según lo ha decantado la Jurisprudencia, es la puerta al acceso a derechos como la pensión, encontrándose en cabeza del empleador el deber de efectuar el descuento al trabajador del porcentaje a cargo de este, y proceder con el pago de la cotización (Art. 22 ibídem); obligación que de ser omitida, además de tener que responder por la totalidad del aporte, puede ser objeto de sanciones pecuniarias.

Luego, indicó que el Legislador a efectos de que se cumpliera efectivamente con esa obligación, concedió facultades a las *administradoras de pensiones (AFP)* para el cobro de los aportes no pagados oportunamente por los empleadores, gestiones que de no cumplirse, genera como consecuencia que deba la AFP asumir los efectos de la mora, contabilizando dichos periodos; ello por cuanto el trabajador no puede soportar las incidencias de su actuar, omisión que le impone cubrir las prestaciones que se causen en favor del afiliado, situación que se viene acogiendo bajo el rótulo de *allanamiento a la mora* (SL351-2020, S15665-2021 y SL2163-2022).

Seguidamente, argumentó que, para el disfrute de la prestación, debía acreditarse la desafiliación del sistema, fuese expresa o tácita, verificándose para esta última las actitudes del afiliado (SL966-2019 y SL12115-2021). De igual forma, precisó las condiciones de liquidación de las pensiones de vejez en los términos del artículo 34 de la Ley 100 de 1993.

A partir de lo expuesto, indicó que la demandante cumplió con la edad requerida en la norma, y comenzó a efectuar cotizaciones en el RPMPD desde el año 1996, como empleada de la señora Rosa Martínez Urrea, con quien reportó cotizaciones por la accionante hasta mayo de 2022; presentándose con esta empleadora mora en varios meses, sin que de otra parte, se advierta en el particular que **COLPENSIONES** adelantase el cobro de los aportes en mora en contra de la citada empleadora; señala que al ser tenidos en cuenta estos periodos, llevan a concluir que la accionante cuenta con más de 1.300 semanas cotizadas, teniendo derecho a la pensión de vejez, efectiva desde el 23 de mayo de 2022, en cuantía equivalente a UN (1) SMLMV.

En cuanto a los intereses moratorios reglados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, consideró que estos procedían desde el 6 de agosto de 2022, hasta la fecha efectiva del pago de lo adeudado.

RECURSO DE APELACIÓN

El apoderado de **COLPENSIONES** apeló la decisión argumentando que, según lo indicado por la Jurisprudencia Laboral, para que proceda la mora patronal, es claro que debe acreditarse la relación laboral que así la genere, sin que pueda endilgar el operador judicial una condena automática por la falta de reporte del patrono en el pago de los aportes a pensión; alegando que incluso, la omisión en el registro de la novedad de retiro, no puede llevar a convalidar estos periodos, circunstancia que fue la decidida por el Juzgado.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Dentro del término otorgado, el apoderado judicial de **COLPENSIONES** reiteró la postura sostenida desde la contestación a la demanda, esto es, que la actora no cumple el número de semanas requerido para obtener la pensión de vejez, recordando igualmente la obligación en cabeza del empleador, por virtud de lo establecido en el artículo 17 de la Ley 100 de 1993.

En ese contexto, señaló que tampoco es posible entrar a convalidar periodos por una aparente mora patronal, pues para ello debe estar acreditada la relación laboral, como lo ha decantado la Jurisprudencia Laboral (Archivo 03 ED Tribunal).

PROBLEMA JURÍDICO

El problema jurídico en el presente asunto se circunscribe a determinar si para el reconocimiento de la prestación económica por vejez, solicitada por la señora **MARIELA AGUDELO MAHECHA**, es procedente la contabilización de los periodos que se registran en su historia laboral con presunta mora, no pagados por su respectivo empleador, como lo hizo la Juez de primera instancia,

De resultar avante lo anterior, se validará si la demandante cumple con los requisitos establecidos en la Ley 797 de 2003 para ser beneficiaria de la pensión de vejez y a partir de qué fecha se daría tal reconocimiento. Seguidamente, se estudiará si operó el fenómeno prescriptivo, e igualmente la viabilidad de imponer condena por concepto de intereses moratorios.

CONSIDERACIONES

Como supuestos de hecho debidamente demostrados en el *sub-lite* se tiene lo siguiente:

- (i) Que la señora **MARIELA AGUDELO MAHECHA** nació el 4 de agosto de 1960 como lo muestra la copia del documento de identidad visible a folio 9 Archivo 02 ED.
- (ii) Que la demandante ha efectuado cotizaciones al ISS hoy **COLPENSIONES** entre 1996 y 2022 a través de la empleadora Rosa Martínez Urrea (f. 10 a 21 Archivo 02 ED).

- (iii) Que, con ocasión de lo anterior, el 6 de abril de 2022 la señora **AGUDELO MAHECHA** solicitó a **COLPENSIONES** el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, petición a la que no accedió esta demandada en la *Resolución SUB 109992 del 25 de abril de 2022* (f. 140 a 143 Archivo 07 ED).

DE LA PENSIÓN DE VEJEZ – MORA PATRONAL

Como quedó planteado desde el problema jurídico, pese a que el tema principal es verificar si la demandante tiene derecho a la pensión de vejez, previo a ello debe ahondar la Sala en estudiar las inconsistencias en la historia laboral enrostradas desde la demanda que, a juicio de la parte actora, deben resolverse en su favor, al tenor de lo trazado por la jurisprudencia en relación con la mora patronal.

Frente a ello, la Juez de primer grado, dentro del estudio de las pretensiones, tuvo en cuenta que la demandante registró afiliación al Sistema General de Pensiones con la empleadora ROSA MARTÍNEZ URREA, desde el 1 de febrero de 1996 hasta la presente época; tiempo durante el cual se registran varios ciclos en mora por el citado empleador, los cuales consideró procedente contabilizar, en la medida que no se advertían las gestiones de cobro adelantadas por **COLPENSIONES**.

Precisamente, al revisarse la documental arrimada al plenario, se encuentra la historia laboral actualizada de la accionante (f. 10 a 21 Archivo 02 ED), la cual refleja, preliminarmente, que la demandante registra un total de **1.232,86** semanas cotizadas durante toda su vida laboral, que, dicho sea de paso, casi que por completo, la desarrolló como trabajadora dependiente de la empleadora referida.

Dicho número de semanas, en principio, sería insuficiente de cara a las exigidas por la legislación pensional para acceder a la prestación por vejez (1.300). No obstante, al verificar en detalles los ciclos aportados por la accionante, se encuentran las siguientes inconsistencias:

EMPLEADOR	PERIODO	INCONSISTENCIA
ROSA MARTÍNEZ URREA	*05/1998 *01 a 02/2000 *12/2000 *08 a 12/2001 *01 a 12/2002 *01 a 02/2003 *01/2004, 01/2005 *01/2006 *01/2007 *01/2008 *08/2008 *11/2008 *03 a 12/2009 *02 a 03/2010 *05 a 06/2010 *10/2010 *12/2010 *01/2012 *09/2012 *11/2012 *12/2013	Reporta 30 días, paga menos

	*03/2017 *05/2017 *03/2018	
ROSA MARTÍNEZ URREA	*06/1998 a 07/1999 *09/1999 a 10/1999	Pago aplicado a periodos anteriores

Puestas las cosas de ese modo, y a efectos de superar este primer escollo, es preciso recordar que por virtud de lo establecido en el artículo 17 de la Ley 100 de 1993, durante la vigencia de la relación laboral, se erige como una obligación del empleador, efectuar el pago de los aportes correspondientes por sus trabajadores dependientes, compromiso que, de ser incumplido, el mismo compendio normativo sienta en cabeza de la administradora correspondiente, el compromiso de adelantar las acciones de cobro pertinentes, de cara al recaudo de los aportes dejados de cancelar por el empleador (Arts. 22 a 24 ibídem).

Justamente, el escenario de la mora tiene ocurrencia cuando existiendo la inscripción previa, o afiliación del trabajador al sistema pensional por parte de su empleador, este último incumple su obligación de realizar los correspondientes aportes; caso en el cual, no puede el afiliado soportar los efectos de la actitud renuente respecto del pago por parte del obligado, y debe la entidad de pensiones proceder con las gestiones de cobro, diligencia que de no ser acreditada, daría lugar a contabilizar tales periodos, por la convalidación de la mora.

Tal situación de antaño ha sido abordada por la jurisprudencia especializada laboral, sosteniendo en sentencia SL1355-2021 que:

“(…) ante una omisión del empleador en el pago de las cotizaciones al sistema de seguridad social en pensiones, si junto con ello, existe un incumplimiento de la administradora en el cobro de los aportes dejados de pagar o cuyo pago se encuentra en mora. »sería ésta última quien estaría llamada a asumir el reconocimiento de la pensión a favor de los afiliados o los beneficiarios del afiliado fallecido, pues éstos no pueden verse perjudicados por el retraso o más, concretamente, por la negligencia administrativa de los respectivos fondos en garantizar el pago oportuno a través de las acciones de cobro para cuyo ejercicio se encuentran legalmente facultados (…)”

De igual forma, en Sentencias SL3277-2021, SL4980-2019 y SL4539-2018 fue rememorada la Sentencia expedida el 22 de julio de 2008 dentro del Rad. 34270, 22 jul. 2008, en la que se razonó:

“(…) Sobre este punto, la Sala desde la sentencia CSJ SL, 22 jul. 2008, rad. 34270 en la que rectificó su criterio, se ha pronunciado de manera reiterada y pacífica, sosteniendo que el incumplimiento de la administradora de pensiones en su deber legal de cobro al empleador moroso, conduce inexorablemente, a que responda por la prestación reclamada, decisión que se ha rememorado recientemente en la CSJ SL3399-2018, en donde se puntualizó:

Sobre la línea jurisprudencial, garantizadora de los derechos de los trabajadores frente a empleadores morosos con el sistema de seguridad social y administradoras de pensiones negligentes en el recaudo de los aportes, la sentencia SL1363-2018 del 11 de abril de 2018, la rememoró así:

“Para responder al requerimiento de la censura, ésta Sala de Casación ratifica, que desde la sentencia CSJ SL 22, jul, 2008, rad. 34270, varió su jurisprudencia respecto a los efectos de la mora del empleador en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones. Es por ello que a partir de la referida providencia, la Corte estableció que

cuando se presente dicha situación, y esto necesariamente impida el acceso a las prestaciones, si además medió incumplimiento de la respectiva administradora en el deber legal que tiene del cobro, es a ésta última a la que le incumbe el pago de las mismas, a los afiliados o a sus beneficiarios.

También hizo expresa precisión la Corte, para el caso concreto de los afiliados en condición de trabajadores dependientes, que, si estos han cumplido cabalmente con el deber que les asiste frente a la seguridad social, de prestar el servicio y así causar la cotización, no pueden salir perjudicados ellos o sus beneficiarios, por la mora del empleador en el pago de los aportes y que, antes de trasladar a éste las consecuencias de esa falta, resulta menester verificar si la administradora de pensiones cumplió con el deber específico del cobro.”

Tal criterio doctrinal se ha reiterado por esta Sala de manera invariable, entre otras, en las sentencias CSJ SL, 13 feb. 2013, rad. 43839; CSJ SL, 15 may. 2013, rad. 41802; CSJ SL8715-2014; CSJ SL14388-2015; CSJ SL15167-2015; CSJ SL16814-2015; CSJ SL14987-2016; CSJ SL17488-2016; CSJ SL13266-2016; CSJ SL2136-2016; CSJ SL15980-2016; CSJ SL4892-2017; y CSJ SL5166-2017, CSJ SL1624-2018 y CSJ SL3550-2018. (...)”

De lo antelado, se desprende entonces que para descartar el reconocimiento de derechos pensionales por existir mora en las cotizaciones, no basta con la comprobación que el empleador no efectúo los aportes, aunque estaba obligado hacerlo, sino que debe tener en cuenta la posición asumida por el fondo de pensiones, toda vez que si esta fue activa e hizo uso de los mecanismos legales diseñados para el recaudo de los aportes, no está en la obligación de asumir el pago de aquellas cotizaciones; cosa que no ocurre cuando su actuar fue pasivo y negligente.

Bajo el panorama descrito, en el particular, destaca la Sala como lo consideró el Juez de instancia, las pruebas efectivamente muestran que la circunstancia acaecida para la demandante, está relacionada con el fenómeno de la mora patronal, frente a lo cual debe destacarse que, si bien dentro del plenario no reposan otros medios de prueba relativos a la vigencia de la vinculación de la demandante con la empleador ROSA MARTÍNEZ URREA, contrario a lo esbozado por el recurrente, la vigencia de la relación durante los periodos referidos con inconsistencias, se puede colegir de la misma historia laboral allegada al proceso (f. 10 a 21 Archivo 02 ED), aspecto del que, justamente, se extrae que la discusión no está atada a la real existencia de la relación laboral, sino al pago efectivo de los aportes a cargo de estos.

Se considera de esa manera, pues la documental muestra **los periodos precisos de cotización, las constancias o números de referencia de pago de los aportes efectuados por la citada empleadora**, relievándose que durante la vigencia de la relación laboral con esta empleadora, que abarca los años 1996 hasta 2022, esto es, alrededor de 26 años, los ciclos en mora se advierten intermitentes, por periodos cortos; una buena parte de esos aportes en mora, lo fueron porque se pagaron menos días de los reportados durante el respectivo ciclo (30 días), esto es, se dio un pago incompleto del ciclo por parte del patrono obligado; y otros periodos, en los que se omitió su pago completo, figuran con imputaciones realizadas por la entidad, dejando esta la anotación “de pagos imputados a periodos anteriores”; y con reporte de novedad de retiro por el empleador a la finalización del vínculo laboral para el año 2022; advirtiendo de otra parte este Colegiado, que no se observa el traslape con registros durante la misma época asociados a otros empleadores, todo lo cual

permite avizorar que se trató de periodos efectivamente laborados, con irregularidades en el pago de la cotización.

Ante lo anotado debe acotarse que, el hecho de no centrar el punto de controversia en torno a la existencia o vigencia de la relación laboral con la empleadora mencionada, no contradice el precedente fundado por el Órgano de Cierre de la Justicia Laboral, de cara a la validación de los periodos en mora, por la omisión de la administradora de pensiones en ejecutar las pertinentes acciones de cobro, ello por cuanto como lo dejara sentado el Alto Tribunal en sentencia SL3490-2019: “(...) *la exigencia probatoria de comprobar el vínculo laboral, solo opera en los casos en los que existen dudas fundadas sobre la vigencia del nexo de trabajo, pues no en todos los eventos en los que se examine una historia laboral,» para contabilizar las semanas cotizadas, se requiere verificar la existencia de un vínculo laboral por cada periodo aportado o dejado de cotizar (...)*”.

Y es que en el actual asunto, como se anotó *ex ante*, no hay lugar a considerar que existen dudas fundadas sobre la existencia de la relación laboral, ni de la continuidad de la misma, como quiera que dentro de su vigencia, además de no reportarse novedad de retiro sino hasta el último ciclo de aportes en mayo de 2022, de la misma historia laboral puede inferirse la prolongación del vínculo, en la medida que se reportan cotizaciones entre febrero de 1996 y mayo de 2022, interregno dentro del cual, sin justificación aparente, la contratante se sustrajo de pagar algunos ciclos, y canceló de manera deficitaria otros periodos, lo que le representó a la actora un déficit en su récord de semanas efectivamente laboradas con el citado empleador, y de paso, alcanzar el número mínimo de semanas exigidas para obtener el beneficio pensional.

Con base en lo expuesto, se observa que la demandada hizo recaer en la afiliada los efectos negativos de la actitud reprochable de su empleadora, supuesto que no se ajusta a derecho, por cuanto tiene adoctrinado el Alto Tribunal que: “(...) *las inconsistencias de las historias laborales derivadas de la negligencia de las entidades administradoras, como en la omisión de cobro, recaudo o validación de los respectivos aportes, no pueden afectar a la persona afiliada (...)*” (SL3691-2021).

De ahí que, es plausible la contabilización de las semanas correspondientes a los periodos descritos, en la medida en que dicho déficit de semanas, colige la Sala, atiende a tratarse de periodos en mora, hecho que la misma Jurisprudencia se ha encargado de precisar, que no puede truncar la consolidación del derecho pensional de la actora, amén que los fondos de pensiones cuentan entre sus obligaciones, con el cobro efectivo de los aportes, acudiendo para ello, de ser necesario, al ejercicio de las acciones legales contempladas en el canon 24 de la Ley 100 de 1993.

Sobre esta última actividad de recaudo, como lo dijo la Juzgadora, echa de menos el proceso la prueba de las gestiones de cobro adelantadas por **COLPENSIONES** con miras a obtener del patronal incumplido, el pago de los aportes dejados de cancelar en favor de su trabajadora, así como los pagados deficitariamente, sin que se observe medio suasorio indicativo de las actuaciones adelantadas en este ámbito, y si en virtud de estas obtuvo resultados favorables, o requirió la declaratoria de “*deuda incobrable*”, resaltándose que esta última decisión solo tiene cabida al acreditarse las actividades de cobro, que, como se dijo, no se advierten en el asunto en cuestión (SL537-2019).

Hechas las anteriores precisiones en punto a las inconsistencias advertidas en la historia laboral de la demandante, se tiene que durante toda su vida laboral el demandante acredita un total de **1.348,56 semanas**, discriminadas en el cuadro anexo a la presente decisión.

Teniendo en cuenta lo anterior, en lo referente al régimen aplicable para definir el derecho a la **pensión de vejez**, la Juez de primer grado analizó su procedencia al tenor de lo previsto en la Ley 100 de 1993, con la modificación introducida por la Ley 797 de 2003.

La citada normativa dispuso para tal fin como requisitos para la pensión de vejez, en el caso de las mujeres, cuando alcanzan los 55 años de edad, la que se incrementará a 57 años a partir de 1° de enero de 2014; y que hubieren cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo, las que a partir del 1° de enero del año 2005 se incrementaron en 50 semanas, y desde el 1° de enero de 2006 se incrementaron en 25 semanas cada año, hasta llegar a 1.300 semanas a partir del año 2015.

Valga aclarar que, la demandante no es beneficiaria del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 ya que para el 1° de abril de 1994, fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, ni siquiera había comenzado a cotizar al sistema de pensiones, toda vez que su vinculación inicial data del mes de febrero de 1996, es decir, con posterioridad al Sistema General de Pensiones (f. 10 a 21 Archivo 02 ED).

Tenemos entonces, que la señora **AGUDELO MAHECHA** cumplió los 57 años de edad el 4 de agosto de 2017 *-nació el 4 de agosto de 1960 f. 9 Archivo 02 ED-*, y acumuló las 1.300 semanas de cotización para el **10 de junio de 2021**, según conteo efectuado por la Sala, acumulando a corte del 22 de mayo de 2022 un total de **1.348,86 semanas**, suficientes para alzarse con el derecho a la pensión pregonada, motivo por el que, como bien lo anotó el *A quo*, sería efectiva desde el **23 de mayo de 2023**, día siguiente a su última cotización reportada en la historia laboral.

En punto de la cuantía de la prestación, se mantendrá en la suma fijada por el *A quo*, ya que corresponde al monto mínimo permitido conforme lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 100 de 1993, con derecho a 13 mesadas anuales, en tanto la pensión estudiada se causó con posterioridad a la limitación de mesadas pensionales establecida en el inciso 8 del artículo 1° del A.L. 01 de 2005.

De ahí que, el retroactivo tasado desde el 23 de mayo de 2022, actualizado hasta el 30 de noviembre de 2023, conforme lo establecido en el artículo 283 CGP, asciende a la suma de **\$22.186.666**, aspecto que habrá de precisarse en la parte resolutive de la decisión, autorizándose igualmente a la entidad para descontar lo pertinente por aportes con destino al SGSSS, como lo dispuso la Juez de primer grado.

DESDE	HASTA	NÚMERO MESADAS	MESADA	RETROACTIVO
23/05/2022	31/12/2022	8,27	\$ 1.000.000,00	\$ 8.266.666,67
1/01/2023	30/11/2023	12	\$ 1.160.000,00	\$ 13.920.000,00
TOTAL RETROACTIVO				\$ 22.186.666,67

La entidad deberá continuar cancelando como mesada pensional el equivalente al SMLMV fijado para cada anualidad.

DE LOS INTERESES MORATORIOS

En relación con los **intereses moratorios**, debe indicarse que el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, dispone que en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata dicha ley, el fondo de pensiones estará en la obligación de reconocer al pensionado, además de la obligación a su cargo, los intereses moratorios vigentes a la fecha en que se efectúe el pago.

Con relación a la fecha a partir de la cual se deben conceder tales intereses, por vía jurisprudencial se tiene establecido que estos se causan **una vez vence el plazo que por ley tiene la entidad de seguridad social para resolver la solicitud del derecho**. Así lo señaló la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, entre otras, en sentencias SL-11750 de 2014, SL-13670 de 2016 y SL-4985 de 2017.

En el presente asunto, se trata de una pensión de vejez, por lo que de conformidad con el artículo 9º de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 33 de la ley 100 de 1993, **los fondos administradores de pensiones cuentan con un término máximo de cuatro (4) meses para resolver las solicitudes atinentes a este derecho**.

Ahora bien, es importante anotar que la Jurisprudencia Especializada Laboral ha definido una serie de situaciones excepcionales consideradas como justificantes para exonerar del pago de estos réditos, citándose a manera de ejemplo lo dicho en la Sentencia SL309-2022, a saber:

“(…) 1. La negativa de las entidades para reconocer las prestaciones a su cargo, tiene respaldo en las normas que en un comienzo regulaban la situación o su postura proviene de la aplicación minuciosa de la ley sin los alcances o efectos que en un momento dado puedan darle los jueces (CSJ SL704-2013); 2. Se otorga una prestación pensional en aplicación de un cambio de criterio jurisprudencial (CSJ SL 787-2013, rad.43602, reiterada en la sentencia CSJ SL2941-2016); 3. Se inaplica el requisito de fidelidad al sistema. Así se expuso en la sentencia CSJ SL10637-2014, reiterada en CSJ SL6326-2016, CSJ SL070-2018 y CSJ SL4129-2018; 4. La controversia se define bajo una interpretación normativa, como sucede en la aplicación del principio de la condición más beneficiosa (CSJ SL12018-2016) y 5. Existe controversia entre beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, tal como se precisó en sentencias CSJ SL 21 sep. 2010, rad. 33399 y CSJ SL 14528-2014. (…)”

Puestas de ese modo las cosas, resulta evidente para la Sala la tardanza injustificada en el reconocimiento de la gracia pensional a la accionante, a la que le asistía derecho desde la reclamación inicial, pues pese a haber señalado la entidad que la demandante no contaba con las semanas requeridas, lo cierto es que, como se evidenció a lo largo del proceso, al constatar que el escenario correspondió a la mora patronal, coonestada por la Administradora de Fondos de Pensiones que no procedió con las acciones de cobro que tenía a su cargo, para obtener el recaudo de lo adeudado, afectó con ello a la afiliada, a quien se le negó el acceso a la prestación, configurándose así entonces la mora en el otorgamiento de la pensión.

Así entonces, teniendo que la demandante elevó la reclamación pensional el 6 de abril de 2022 (f. 140 a 143 Archivo 07 ED), los intereses en comento se generan a partir del **7 de agosto de 2022**, día siguiente al vencimiento de los cuatro (4) meses con que contaba la demandada para reconocer el derecho por sobrevivencia, y no desde la fecha indicada por el *A quo*, liquidados hasta el momento en que esta concurra al pago de las mesadas adeudadas, por lo que habrá de modificarse la decisión en este punto.

Valga aclarar que, el retroactivo y los intereses elucidados no están afectados por la figura de la prescripción invocada por la entidad accionada, como la efectividad del derecho se estableció desde el 23 de mayo de 2022, mientras que la demanda originaria del presente proceso fue radicada el 25 de mayo de 2022 (f. 1 Archivo 02 ED), de donde es claro que no alcanzó a transcurrir el plazo trienal requerido para la consolidación de la figura extintiva.

Consecuencia de lo hasta aquí expuesto, se modificará la decisión en punto de la fecha desde la cual proceden los intereses moratorios, confirmándose en lo demás la decisión apelada. Así mismo, se actualizará el retroactivo de mesadas en favor de la accionante. Las costas en esta instancia a cargo de **COLPENSIONES**, incluyendo como agencias en derecho la suma equivalente a UN (1) SMLMV.

Sin que sean necesarias más consideraciones, la **SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR el numeral **QUINTO** de la Sentencia del 4 de mayo de 2023, proferida el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Medellín, en el sentido de **PRECISAR** que los intereses moratorios reglados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, proceden desde el **7 de agosto de 2022** y hasta el pago efectivo de las mesadas adeudadas.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada y consultada.

TERCERO: ACTUALIZAR la condena por retroactivo de la pensión de vejez causado entre el 23 de mayo de 2022 y el 30 de noviembre de 2023, que se fija en la suma de \$22.186.666, de conformidad con lo establecido en el artículo 283 CGP.

CUARTO: Las **COSTAS** en esta instancia están a cargo de **COLPENSIONES**, incluyendo como agencias en derecho la suma equivalente a UN (1) SMLMV.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Los Magistrados,

MARIA NANCY GARCÍA GARCÍA

MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO

ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA

ANEXO 1°.

EMPLEADOR	PERIODOS (DD/MM/AA)		DÍAS DEL	SEMANAS	NOTAS DEL CÁLCULO
	DESDE	HASTA	PERIODO		
ROSA MARTÍNEZ URREA	1/02/1996	31/12/1996	330	47,14	
ROSA MARTÍNEZ URREA	1/01/1997	31/12/1997	360	51,43	
ROSA MARTÍNEZ URREA	1/01/1998	30/04/1998	120	17,14	
ROSA MARTÍNEZ URREA	1/05/1998	31/05/1998	30	4,29	Ciclo Incompleto - 2 días
ROSA MARTÍNEZ URREA	1/06/1998	31/07/1999	420	60,00	Mora Patronal
ROSA MARTÍNEZ URREA	1/09/1999	31/10/1999	60	8,57	Mora Patronal
ROSA MARTÍNEZ URREA	1/11/1999	31/12/1999	60	8,57	
ROSA MARTÍNEZ URREA	1/01/2000	31/01/2000	30	4,29	Ciclo Incompleto - 2 días
ROSA MARTÍNEZ URREA	1/02/2000	29/02/2000	30	4,29	Ciclo Incompleto - 15 días
ROSA MARTÍNEZ URREA	1/03/2000	30/11/2000	270	38,57	
ROSA MARTÍNEZ URREA	1/12/2000	31/12/2000	30	4,29	Ciclo Incompleto - 15 días
ROSA MARTÍNEZ URREA	1/01/2001	31/07/2001	210	30,00	
ROSA MARTÍNEZ URREA	1/08/2001	31/08/2001	30	4,29	Ciclo Incompleto - 14 días
ROSA MARTÍNEZ URREA	1/09/2001	30/09/2001	30	4,29	Ciclo Incompleto - 14 días
ROSA MARTÍNEZ URREA	1/10/2001	31/10/2001	30	4,29	Ciclo Incompleto - 14 días
ROSA MARTÍNEZ URREA	1/11/2001	30/11/2001	30	4,29	Ciclo Incompleto - 8 días
ROSA MARTÍNEZ URREA	1/12/2001	31/12/2001	30	4,29	Ciclo Incompleto - 8 días
ROSA MARTÍNEZ URREA	1/01/2002	31/01/2002	30	4,29	Ciclo Incompleto - 15 días
ROSA MARTÍNEZ URREA	1/02/2002	28/02/2002	30	4,29	Ciclo Incompleto - 14 días
ROSA MARTÍNEZ URREA	1/03/2002	31/03/2002	30	4,29	Ciclo Incompleto - 14 días
ROSA MARTÍNEZ URREA	1/04/2002	30/04/2002	30	4,29	Ciclo Incompleto - 14 días
ROSA MARTÍNEZ URREA	1/05/2002	31/05/2002	30	4,29	Ciclo Incompleto - 14 días
ROSA MARTÍNEZ URREA	1/06/2002	30/06/2002	30	4,29	Ciclo Incompleto - 14 días
ROSA MARTÍNEZ URREA	1/07/2002	31/07/2002	30	4,29	Ciclo Incompleto - 14 días
ROSA MARTÍNEZ URREA	1/08/2002	31/08/2002	30	4,29	Ciclo Incompleto - 14 días
ROSA MARTÍNEZ URREA	1/09/2002	30/09/2002	30	4,29	Ciclo Incompleto - 14 días
ROSA MARTÍNEZ URREA	1/10/2002	31/10/2002	30	4,29	Ciclo Incompleto - 14 días

ROSA MARTÍNEZ URREA	1/11/2002	30/11/2002	30	4,29	Ciclo Incompleto - 14 días
ROSA MARTÍNEZ URREA	1/12/2002	31/12/2002	30	4,29	Ciclo Incompleto - 14 días
ROSA MARTÍNEZ URREA	1/01/2003	31/01/2003	30	4,29	Ciclo Incompleto - 15 días
ROSA MARTÍNEZ URREA	1/02/2003	28/02/2003	30	4,29	Ciclo Incompleto - 15 días
ROSA MARTÍNEZ URREA	1/03/2003	31/12/2003	300	42,86	
ROSA MARTÍNEZ URREA	1/01/2004	31/01/2004	30	4,29	Ciclo Incompleto - 4 días
ROSA MARTÍNEZ URREA	1/02/2004	31/12/2004	330	47,14	
ROSA MARTÍNEZ URREA	1/01/2005	31/01/2005	30	4,29	Ciclo Incompleto - 3 días
ROSA MARTÍNEZ URREA	1/02/2005	31/12/2005	330	47,14	
ROSA MARTÍNEZ URREA	1/01/2006	31/01/2006	30	4,29	Ciclo Incompleto - 3 días
ROSA MARTÍNEZ URREA	1/02/2006	31/12/2006	330	47,14	
ROSA MARTÍNEZ URREA	1/01/2007	31/01/2007	30	4,29	Ciclo Incompleto - 2 días
ROSA MARTÍNEZ URREA	1/02/2007	31/12/2007	330	47,14	
ROSA MARTÍNEZ URREA	1/01/2008	31/01/2008	30	4,29	Ciclo Incompleto - 3 días
ROSA MARTÍNEZ URREA	1/02/2008	29/02/2008	30	4,29	
ROSA MARTÍNEZ URREA	1/03/2008	31/07/2008	150	21,43	
ROSA MARTÍNEZ URREA	1/08/2008	31/08/2008	30	4,29	Ciclo Incompleto - 2 días
ROSA MARTÍNEZ URREA	1/09/2008	31/10/2008	60	8,57	
ROSA MARTÍNEZ URREA	1/11/2008	30/11/2008	30	4,29	Ciclo Incompleto - 1 día
ROSA MARTÍNEZ URREA	1/12/2008	28/02/2009	90	12,86	
ROSA MARTÍNEZ URREA	1/03/2009	31/12/2009	300	42,86	Ciclos Incompletos - 1 día cada mes
ROSA MARTÍNEZ URREA	1/01/2010	31/01/2010	30	4,29	
ROSA MARTÍNEZ URREA	1/02/2010	31/03/2010	60	8,57	Ciclo Incompleto - 1 día cada mes
ROSA MARTÍNEZ URREA	1/04/2010	30/04/2010	30	4,29	
ROSA MARTÍNEZ URREA	1/05/2010	30/06/2010	60	8,57	Ciclo Incompleto - 1 día cada mes
ROSA MARTÍNEZ URREA	1/07/2010	30/09/2010	90	12,86	
ROSA MARTÍNEZ URREA	1/10/2010	31/10/2010	30	4,29	Ciclo Incompleto - 1 día
ROSA MARTÍNEZ URREA	1/11/2010	30/11/2010	30	4,29	
ROSA MARTÍNEZ URREA	1/12/2010	31/12/2010	30	4,29	Ciclo Incompleto - 1 día
ROSA MARTÍNEZ URREA	1/01/2011	31/12/2011	360	51,43	

ROSA MARTÍNEZ URREA	1/01/2012	31/01/2012	30	4,29	
ROSA MARTÍNEZ URREA	1/02/2012	29/02/2012	30	4,29	Ciclo Incompleto - 1 día
ROSA MARTÍNEZ URREA	1/03/2012	31/08/2012	180	25,71	
ROSA MARTÍNEZ URREA	1/09/2012	30/09/2012	30	4,29	Ciclo Incompleto - 1 día
ROSA MARTÍNEZ URREA	1/10/2012	31/10/2012	30	4,29	
ROSA MARTÍNEZ URREA	1/11/2012	30/11/2012	30	4,29	Ciclo Incompleto - 1 día
ROSA MARTÍNEZ URREA	1/12/2012	30/11/2013	360	51,43	
ROSA MARTÍNEZ URREA	1/12/2013	31/12/2013	30	4,29	Ciclo Incompleto - 1 día
ROSA MARTÍNEZ URREA	1/01/2014	31/12/2014	360	51,43	
ROSA MARTÍNEZ URREA	1/01/2015	31/12/2015	360	51,43	
ROSA MARTÍNEZ URREA	1/01/2016	31/12/2016	360	51,43	
ROSA MARTÍNEZ URREA	1/01/2017	28/02/2017	60	8,57	
ROSA MARTÍNEZ URREA	1/03/2017	31/03/2017	30	4,29	Ciclo Incompleto - 1 día
ROSA MARTÍNEZ URREA	1/04/2017	30/04/2017	30	4,29	
ROSA MARTÍNEZ URREA	1/05/2017	31/05/2017	30	4,29	Ciclo Incompleto - 1 día
ROSA MARTÍNEZ URREA	1/06/2017	31/12/2017	210	30,00	
ROSA MARTÍNEZ URREA	1/01/2018	28/02/2018	60	8,57	
ROSA MARTÍNEZ URREA	1/03/2018	31/03/2018	30	4,29	Ciclo Incompleto - 1 día
ROSA MARTÍNEZ URREA	1/04/2018	31/12/2018	270	38,57	
ROSA MARTÍNEZ URREA	1/01/2019	31/12/2019	360	51,43	
ROSA MARTÍNEZ URREA	1/01/2020	31/12/2020	360	51,43	
ROSA MARTÍNEZ URREA	1/01/2021	31/12/2021	360	51,43	
ROSA MARTÍNEZ URREA	1/01/2022	30/04/2022	120	17,14	
ROSA MARTÍNEZ URREA	1/05/2022	1/05/2022	1	0,14	Retiro
INDEPENDIENTE	2/05/2022	31/05/2022	21	3,00	
		TOTALES	9.442		
TOTAL SEMANAS COTIZADAS			1.348,86		